

De lo innato a lo performativo: dos conceptos rivales de la corrupción, siglos xvii y xviii

Christoph Rosenmüller

Introducción

En 1673, el jurista Domingo Antúnez Portugal lamentó que los “hombres corrompidos por ambición y codicia e infames por su sangre”¹ torcieran la justicia.² Según esa idea ampliamente compartida en los imperios atlánticos, la corrupción era una calidad innata y vinculada con el insuficiente origen social. En lugar de enfocarme en la discrepancia entre las leyes reales y el desempeño en el cargo, sostengo que existía otro concepto que correspondía con los valores del antiguo régimen. Necesario para evitar abusos en la justicia fue el mérito o la buena procedencia social la que otorgaba las cualidades necesarias para actuar virtuosamente en las magistraturas.³ En gran medida, el origen social, a veces combinado con los servicios, formó el mérito. Mientras tanto, nombrar jueces en violación del mérito tradicional era corrupción, porque aquella gente no tenía las cualidades a resistir la avaricia y los sobornos. Como el imperio español se enfrentó con otras potencias Atlánticas, paulatinamente se alineó más la actuación de los jueces y oficiales con las leyes reales, y la noción de corrupción se transformó. A

1 “Magistratus viris ambitione, & avaritia corruptis, & sanguine infamibus”, Antúnez Portugal (1673), *Tractatus*, pars. sec., lib. i, cap. xiv, para. 7; Pedro de Portocarrero y Guzmán (1700) por ejemplo extensamente citó a Antúnez Portugal, *Theatro*, 372-377. Las tendencias historiográficas sobre la corrupción atlántica discutimos los editores en la introducción.

2 Este capítulo es un avance del libro monográfico titulado *Corruption and Justice in Imperial New Spain and Spain*, mismo que se fue realizado gracias a la beca de investigación Fulbright García-Robles. Agradezco al Dr. Gibrán Bautista y Lugo, de la UNAM, al Dr. Stephan Ruderer, de la Universität Münster, y a Marcela Saldaña, del INAH, sus valiosas sugerencias al texto, igual como los comentarios de los participantes del Seminario de Historia Económica de El Colegio de México y del Dr. Andrés Lira.

3 La distinción entre cargos públicos y persona privada desarrolló ya Tomás de Aquino (2001) en *Suma Teológica* II IIae, cap. 67, art. 3. Véase también Garriga (2006): *Sobre el gobierno*, 81.

partir del tardío siglo dieciséis, los tratadistas y políticos pusieron más atención en la utilidad para la Corona y el desempeño en el cargo para evitar la violación de disposiciones reales. Las alianzas entre el poderío real y los grupos extraídos en gran parte de la hidalguía y la burguesía favorecían el cambio en la noción. El poder económico y la influencia política de aquellos grupos crecieron en la medida que la Corona los necesitaba.

Para explicar este concepto diferente de la corrupción tanto como la gran divergencia entre lo que mandan las leyes reales y la actuación de los jueces y oficiales, una corriente más reciente de la historiografía legal hace hincapié en el “pluralismo judicial”. Según esta perspectiva, esta polivalencia se componía de las leyes de Indias y Castilla, del *ius comune*, es decir, la recepción medieval de las leyes romanas y canónicas, los comentarios de las autoridades eclesiásticas, y el sinfín de casos o precedentes adjudicados en las cortes (Tau Anzoategui 2000: 2-4, 25-26; Hespanha 2006: 23). Algunos historiadores de la corrupción ya enfatizan aquel pluralismo. Sin embargo, hasta cierto punto la historia jurídica ha restado importancia a la operación concreta de las leyes en el entorno social (Garriga 2006). Por otro lado, algunos historiadores como Tamar Herzog se enfocan predominantemente en los fenómenos sociales que determinaron la actuación de los oficiales y subexponen la función de los mandatos legales. Herzog concluye que en el antiguo régimen existía una idea distinta de la justicia que era irreconciliable con el concepto de la corrupción (Herzog 2004: 154).

Aunado a esos avances importantes, yo sostengo que la polivalencia proveía justamente las normas de un concepto alternativo: el de la corrupción innata. Más allá de las leyes reales, el discurso sobre la corrupción innata cristalizó en comentarios sobre el buen gobierno, textos legales y teológicos, y en prácticas de control como la visita de la audiencia de Francisco de Garzarón (1715/16-27). Como el pluralismo judicial dio normas a varias perspectivas de la justicia que estaban en pugna, se trata aquí de una comunicación sobre la corrupción más que reglas fijas que la determinaron. Por esta razón, este artículo se concentra en un periodo que va de la mitad del siglo xvii, donde los discursos de la corrupción innata estuvieron todavía muy presentes, hasta el reinado de Carlos III, cuando aquella perspectiva ya estaba en pleno declive.

1. La corrupción innata

En el imperio español, la Corona empezó en 1633 a vender nombramientos a oficios sin derechos patrimoniales, es decir, el llamado beneficio, lo cual causó largos y amargos debates. Diversas voces censuraron la venta como abuso o corrupción. Mark Burkholder y D. S. Chandler, cuyo trabajo perspicaz sigue siendo la referencia principal sobre el tema, sugirieron hace décadas que a través de este proceso “ministros de cuestionable carácter y conducta profesional” conseguían plazas de justicia y gobierno (1977: 6 nota 10, 15, 17-21, 32-40). Los historiadores se basaron en muchos comentaristas del antiguo régimen según los cuales la venta violaba el principio de la asignación de cargos por mérito, una noción que remitía al ámbito de la justicia distributiva. A la justicia distributiva correspondía, según los historiadores, el arreglo de los nombramientos de oficios indios entre americanos, peninsulares y criados de los virreyes (Burkholder 2013: 63; Hespanha 1997: 22). Más allá de esta vista, el término tenía una definición precisa, prescribiendo la atribución de cargos según el mérito y servicios de una persona. El eminente teólogo aristotélico Tomás de Aquino (c. 1225-1274) propuso que:

la justicia distributiva se da a una persona tanto más de los bienes comunes cuanto más preponderancia tiene dicha persona en la comunidad. Esta preponderancia se determina en la comunidad aristocrática por la virtud; en la oligárquica, por las riquezas; en la democrática, por la libertad, y en otras, de otra forma. (Aquino 2001: II IIae, cap. 61, art. 2, sol.)

La justicia distributiva entonces difiere de la noción moderna de la “justicia social”, consistente en dar a los menos privilegiados para equilibrar diferencias sociales. Al contrario: Cuando la comunidad política repartía premios o cargos, la justicia distributiva exigía que personas con preeminencia social (*principalitatem*), es decir, el mérito tradicional, merecieran los cargos correspondientes a su nivel social. Este concepto no se refería tanto a la riqueza de una persona sino a su descendencia noble y esclarecida. La idea explica, entre otros factores, que los virreyes de Nueva España solían ser aristócratas o sus hijos, ya que a este grupo selecto correspondía tal mérito. En el nivel más bajo, el jurista Juan Solórzano y Pereira (1575-1655) recomendó que los virreyes nombraran los “beneméritos” descendientes de los pobladores originales para las alcaldías mayores, es decir

administradores y jueces de provincias, tomando en cuenta la “justicia distributiva” (Solórzano 1972: lib. v, cap. xii, 35, 38, cita en 39).

Observar la justicia distributiva era primordial, ya que el juez era vica-rio del rey mismo y sólo los ministros con reputación irreproachable de-be-rían ascender a la judicatura. El juez perfecto o *iudex perfectus* determinaba en el tribunal de su conciencia la solución adecuada para cada caso esco-giendo entre múltiples leyes, ya que el derecho pre-moderno no se reveló a través de un párrafo o principio legal (Garriga 2006: 84-86, 158). Por lo cual, se debería dar las plazas a los jueces idóneos, hábiles, y con mérito según los estándares del antiguo régimen.

Este mérito no era conforme con lo de hoy, y no consistía principal-mente en la performatividad en el cargo o la educación examinada, sino se definía en buena medida con base en el origen social esclarecido. En muchos casos, sólo esta proveniencia otorgó las cualidades innatas que per-mitían a un funcionario actuar virtuosamente. Por ello, era importante demostrar ritualmente la pureza del linaje o limpieza de sangre, es decir, la descendencia exclusivamente cristiana y blanca, y cualquier falta de la limpieza podía afectar hasta los estamentos más altos. La gracia divina y la voluntad del príncipe fundaron la nobleza en la teoría, pero en la práctica era cuestión de herencia. En el norte de la península el porcentaje de hi-dalgos era más alto que en otras partes del imperio, y aquellos bajos nobles confirmaron sus privilegios a través de probanzas con testigos. Otra for-ma de demostrar origen destacado fue la pertenencia a órdenes militares. En el mundo hispano, las de Santiago, Calatrava y Alcántara fueron las principales. Además un título de nobleza, como un condado, marquesa-do o ducado daba por hecho la preeminencia, y la grandeza era aún más exclusiva y legalmente garantizada. Durante el siglo xvii diversos grupos de la aristocracia hispana buscaban mantener la exclusividad y restringir el avance de familias nuevas a su estamento (Büschges 2005: 161-164; Hering Torres 2011: 30, 38; Hausberger 2011: 102). También existía una nobleza autóctona en Indias la que originalmente no era cristiana. Después de la conquista, la Corona reconoció la nobleza india a la par de la hidal-guía castellana. En 1673, por ejemplo, doña María Montezuma “viznieta del emperador Montezuma que lo fue de las Indias de la Nueva España”, pedía un gobierno importante para poder casarse con “persona de su san-gre y obligaciones”.⁴ El mérito de su descendencia ilustrada otorgó a doña

4 La reina al conde de Medellín, Madrid, 29 de abril de 1673; AGI, México 14.

María Montezuma la razón de pedir un cargo comparable a lo que se dio a los nobles peninsulares.

En esta perspectiva tradicional, el arquetipo de un juez era el noble de estirpe establecida, acaudalado, y con cierto margen de independencia frente a la voluntad real. En 1654 el portugués Luis Torres de Lyma elogió precisamente este ideal. Según el autor, Ezequías, rey de Judá de ca. 725 hasta 697 A.C., “no sufría en su reino injusticias, siendo vigilantísimo en administrar la justicia & para ministros buscaba íntegros y no partidarios, ricos y no pobres, letrados y no idiotas, libres y puros y no cautivos o dependientes”.⁵

Estas calidades eran clave, y una persona demostraba la aspiración de mudar de estado social y alcanzar la nobleza a través de obras como el servicio de las armas, la obtención de grados universitarios y el ejercicio de cargos públicos, como por ejemplo en los cabildos municipales. La distinción entre esos conceptos de la nobleza adquirida, los méritos y los servicios no era siempre precisa, y la manera cómo se relacionaban estos tres aspectos cambiaba a través del tiempo (por ejemplo, Lancina 1687: 10). Los servicios tenían frecuentemente el carácter de un contrato directo y personal entre el rey y los candidatos. En sus probanzas de servicios, los peticionarios argumentaban que habían brindado servicios —en especial los militares— a la Corona, el bien público o la república, sus vecinos y la iglesia; bajo riesgo, con gastos y trabajo, y no habían recibido la recompensa correspondiente, especialmente cuando se trataba de personas de edad avanzada o con escasos recursos. El rey tenía el deber de compensar sus servicios con cargos reales (Mazín 2011: 64-65, 72; Hausberger 2011: 86, 94-96; Thompson 2012: 285-286).

Como los cargos eran muchas veces premios por servicios brindados en el pasado, la capacidad en el desempeño también jugó un papel, pero los criterios sobre su carácter e importancia eran generales y remitían a las virtudes mientras sólo constituyeron un aspecto entre muchos otros. El jurista Castillo de Bobadilla exigía que los tenientes de los corregidores peninsulares hubieran estudiado derecho y “pasado las leyes del reyno”, haber sido examinados en el real consejo, y que dispusieran de “experiencia de

5 El “Santo Rey Ezechias não soffreo em seu Reyno injustiças, sendo vigilantissimo em se administrar a justiça: & pera ministros del la, buscaua inteiros, & não partidos; ricos & não pobres; letrados, & não idiotas, liures, & puros, & não catiuos, & ligados”, Torres de Lima, *Compendio*, 71.

negocios, buen entendimiento” (1616: lib. 1, cap. xii, para. 16).⁶ Sin embargo, esos requisitos no eran bien claros, y la “experiencia de negocios”, o el “buen entendimiento” poco definidos.

Además de estos criterios, vivir la buena fama según las virtudes cristianas importaba. La nobleza, la pureza, y el propio dinero otorgaron al individuo la posibilidad de vivir las buenas costumbres como justicia, prudencia, valor y moderación, tanto como fe, caridad, y esperanza. Para los alcaldes mayores, Solórzano exigía “christiandad y bondad y [ser] cuerdos”, mientras un autor anónimo –probablemente el proponente del poderío real, Melchor de Macanaz (1670-1760)– enfatizó al principio del siglo dieciocho que estas virtudes seguían en vigencia ya que “la fe [...] es la que da valor a estas cuatro virtudes”.⁷

En algunas instancias los funcionarios bajo investigación, aunque fuera rutinaria, usaban el mérito como estrategia defensiva. El virrey del Perú, el conde de Chinchón (1628-1638), se quejó de que el oficial “ingresaba bajo palio, y a la salida se debía pasar por las horcas caudinas del juicio de residencia” (en Vallejo García-Hevia, 2008: 465, nota 263). El oidor de la audiencia y presbítero, Juan Díaz de Bracamonte, insistió frente al visitador de la audiencia de México, Francisco de Garzarón (1715/16-27) en la “presuncion que tienen a su favor, los jueces, y mas los que son eclesiasticos”.⁸ En el fondo, estas refutaciones se basaban en la idea de que había que interpretar cualquier acusación a la luz de la preeminencia de una persona. Sin embargo, era más común defenderse en mantener que ninguna ofensa había ocurrido, o que un acto específico no era un delito. El mérito garantizó supuestamente la jurisprudencia recta, pero una vez inculpado de un delito, era más difícil sostener que el mérito permitía tal conducta.

Mientras el mérito jugó un papel importante, era imprescindible en muchos, si no en todos casos la recomendación de un patrón. Es decir, la actuación en una red clientelar era clave para avanzar a una plaza (Droste

6 Domingo de Soto ya insistió en equilibrar la justicia distributiva contra la justicia conmutativa en escoger magistrados y exigía “necesidad de la ciencia, de la prudencia, de la habilidad y sobre todo de la fortaleza de ánimo, además de la buena conducta”, y “otras cualidades que son útiles para gobernar” (de Soto 1968: 2: 267).

7 Solórzano 1972: lib. 5, cap. 2, para. 3; Macanaz: “El deseado gobierno, buscado por el amor de Dios [...]”, sin fecha, Biblioteca Nacional de España (BNE), MS 5671, f. 25-25v.

8 “Cargos particulares contra [...] Juan Díaz de Bracamonte,” in “Relacion de los Autos de Visita General [...] fecha en Buen Retiro a 21 Diciembre 1715,” AGI, México 670 B, f. 128v.

2002: 577-579). Sin embargo, los contemporáneos estaban bien conscientes de la tensión entre el ideal del mérito y el clientelismo. El agustino Juan Zapata y Sandoval arguyó que cuando se prefiere la “propincuidad o consanguinidad” de los promovidos, aunque no tengan que ver con el “negocio que había de tratarse” entonces “la acepción de personas es un pecado opuesto a la Justicia Distributiva” (1994: [vol. 1] cap. iv, 9; cap. v, para. 7). El pecado en la acepción de personas o *crimen acceptionis personae* consistía en nombrar a una persona por el favor o la pasión en vez de considerar la idoneidad o aptitud con base en el mérito y los servicios. Por su parte, el aristocrático canónigo de la catedral de Toledo, Pedro de Portocarrero y Guzmán, mantuvo en 1700 que la “distribucion de premio [...] si no es arreglada al merito sin excepcion de personas, inquieta los animos, y tal vez la opression” (Portocarrero y Guzmán 1700: 337). Más bien que a la excepción, Portocarrero y Guzmán se refirió a la acepción de personas. Este postulado también era conocido fuera del imperio español. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, rechazó conferir un puesto al que sabía cortejar más que tener mérito (Fernández de Otero 1732: pars 1, cap. iii, para. 1; de Soto 1968: 2:250-251; 266-270; Maquiavelo 1967: lib. 1, cap. 18).

Nombrar a personas sin suficientes servicios y méritos era para muchos una violación de la justicia y por ende, corrupción e incluso tiranía. Pedro de Portocarrero y Guzmán afirmó que “los Tribunales [...] descaecen de su estimacion, por introducirse en ellos sujetos indignos de semejante carácter [...] por su inexperiencia, ò inhabilidad, echan à perder los negocios con detrimento de la publica utilidad [...] de la corrupcion, que oy padecen los Tribunales, es esta la causa” (Portocarrero y Guzmán 1700: 374, 337). Es decir, los nombramientos de sujetos sin suficiente mérito causaba la corrupción del imperio español. Esta visión se basó mucho menos en la falta de actuación según las leyes reales que en los defectos de procedencia.

El perfil de gente poco idónea o inhábil esbozó Antonio Fernández de Otero, cuya tercera edición del *Tractatus de Officialibus Reipublicae* se publicó en 1732. El autor exigía excluir a “Judíos, y los recién conversos”, los neófitos “que en Castilla se llaman Marranos”, y los descendientes de herejes. Los conversos y sus descendientes habían traicionado la fe y sus valores, incluso la lealtad, según él, y no se les podía confiar los cargos públicos (pars 1, cap. iii, para. 1, 1). Algunos grupos sociales extendieron esta visión en América a los mestizos, los africanos y sus descendientes. El visitador general de la audiencia de México, Francisco de Garzarón, por

ejemplo, inculpó al alguacil mayor de la corte de haber nombrado tenientes “mulatos coyotes y mestizos y que por sus malas inclinaciones han sido procesados por varios delitos”. Igual la universidad y el protomedicato de Lima se resistieron en 1750 a admitir a “mestizos, zambos, mulatos ni cuarterones” en los estudios y oficios por ser “sujetos no beneméritos” con “nota de infamia” y “defectos de nacimiento”.⁹ Sin embargo, esta posición era más controvertida en referencia a los indios. Juan Zapata y Sandoval en 1609 soslayó que según la justicia distributiva, los indios precisamente merecían los cargos eclesiásticos y seculares, como ya no eran neófitos y habían pasado 90 años desde su conversión.¹⁰

Aparte de los mestizos y nuevos cristianos eran también sospechosos quienes trabajaban en oficios “viles” con sus manos o que trataban mucho con dinero. Además de herreros y carpinteros (Böttcher 2011: 188-189), Fernández de Otero exigió excluir casi todos los trabajadores manuales, es decir “los taberneros, arrieros, zapateros, hospedadores, vulgo, mesoneros, los empanaderos, y los que [ejercen] oficios mecánicos [...] pastores”.¹¹ Además de estos grupos, el autor recomendó excluir a mercaderes y vendedores, de hecho, a todas personas que intercambiasen dinero por su ocupación, por que

Bartolus de Sassoferrato reclama que los negociantes, los artes serviles, no solicitan las dignidades y honores, y se rechaza tales solicitantes, por ende surge la cuestión, que Ioannes de Platea contesta, que se los rechaza de las dignidades y honores, incluso de los bajos y humildes, por la vileza de sus tratos, pero no sólo cuando sirven sus oficios de manera punible, o porque son infames, sino porque ejercen tales oficios [...] porque se corrompen a través de los cargos viles tanto como los dineros, y por lo cual anuncian sin duda que

9 “Cargos del alguacil de Corte Don Francisco de Fonseca Enriquez”, s.d., AGI, Escribanía de Cámara 288A, “Relacion [...] de los ministros inferiores [...]”, f. 2; el cabildo de Veracruz excluyó escribanos de origen “indio y mulato”, real cédula, Casa Tejada, 15 de marzo de 1704, Archivo General de la Nación, Reales Cédulas Originales 32, exp. 14, f. 2; real cédula, Buen Retiro, 27 de septiembre de 1752, en Konetzke (1953-1962) (ed.), *Colección* vol. 3, tomo 1, pp. 265-266; *Recopilación de leyes [...]* (1953), lib. 1, tít. 22, ley 57.

10 Los indios eran ciudadanos y por ende “civis est nec a civitatis privilegiis et praerogativis prohiberi potest” (Zapata y Sandoval 1995 [vol. 2], cap. ix, para. 4-16, cita de 14).

11 “Nec tabernarii, muliones, sutores, hospitatores, vulgo, Misoneros, artocreatarii & alii qui Mechanica officia de quibus loquitur Tiraqueau de nobilitate cap. 34 [...] nec pastores”, (Fernández de Otero 1732: pars 1, cap. iii., para. 1, 37); sobre el jurista francés (1488-1558), Jonathan Otto (2009): “Tiraquellus, Andreas (André Tiraqueau)”.

son empleados en bajos trabajos de mano y viles prestantes, y se les quita los oficios honoríficos.¹²

Fernández de Otero citó a los reconocidos juristas Juan de Platea (siglo ^{xiv}/^{xv}) y Bartolo de Sassoferrato (1313/14-1357), quienes ya habían aclarado la idea de la gente inhábil. En sus comentarios al Derecho Romano, Bartolo calificó a los negociantes como viles e incluyó a los pastores de cerdos y vendedores de aceite.¹³ Su parecer importaba, porque el reconocimiento del jurista era tal que “cuando no se podía encontrar una regla positiva sobre un asunto, la mejor práctica era seguir lo que Sassoferrato había enseñado. En algunas jurisdicciones eso era una regla en sí misma. En un periodo tan tardío como el fin del siglo ^{xviii}, las universidades requerían que el derecho civil se enseñara ‘según Bartolo’”.¹⁴ La preocupación de Bartolo de Sassoferrato muestra que el discurso sobre las actividades corrompidas por el dinero y la gente inhábil para cargos de justicia se formuló por lo menos desde la Baja Edad Media, si no antes, y siguió vivo durante el siglo ^{xviii}. En este sentido, el fiscal de la chancillería de Valladolid, Jerónimo Castillo de Bobadilla, señaló en su *Política para corregidores*, originalmente publicada en 1597 y reimpresa en 1704, que “la vida del mercader es vil, y contraria a la virtud, y aquel es mejor mercader, que mas adquiere y es mucho de llorar que los que con usuras, falacias, y engaños acumulan dineros, rijan y gobiernen las Republicas” (Castillo de Bobadilla 1616: 1: 489; esbozo biográfico en González Alonso 1978: 7-34). En 1716 el fiscal del

12 “Ne quis ex ultimis, c. De dignitatibus lib 12 qui Bart[olus de Saxoferrato] Expressè sumit illum textum: sic quod negociantes, artes vilissimas ad dignitatem seu honorem non aspirant & aspirantes repelluntur a dignitate seu honore etiam quaesito, & ubi Ioannes de Platea, ubi etiam ait quod propter vilitatem negotiationum repelluntur a dignitatibus & honoribus, tanquam viles & humiles, non autem propter poenale exercitium negotiationum, nec quia sunt infames, sed quia talia officia exercent & ponderanda sunt verba illa, abjectisque officiis ut l. Deformibus monetariis etiam, que utique insinuant quod exercentes mechanica officia abiecta ista praestantes vilia, privantur Officiis honorificis [...]”, (Fernández de Otero 1732: cap. iii, para. 1, 37).

13 De tal manera rechazando la glosa a la ley romana, “Ars vilissima dicitur vendere oleum & fal. Ne quis. Artes vilissimas ad dignitate non aspirant, & aspirantes repelluntur ab ea. hoc dicit. Facit inf. negoci. ne militent. l. j & no. appellari vilissimas artes illorum, qui stant ad custodiam porcorum, & illorum q vendunt oleum, & fal. ut dicit gl.; Bartolus de Saxoferrato (1595): *Omnium Iuris Interpretum Antesignani Comentariorum*, Bar. ad duodecimum Librum Codicis. De dignitatibus, lex vi (f. 48v).

14 Peter Weimar (2009): “Bartolus of Saxoferrato”; véase los esbozos de Bartolus y Platea en Speer (2014): *Rechtshistorische Notizen*.

Consejo de Indias recuperó esta idea en su parecer a excluir mercaderes de los cargos de alcaldes mayores en la Nueva España.¹⁵

Inhábiles para oficios de justicia eran también la gente con discapacidad, los hijos de uniones ilegítimas, y mujeres. Fernández de Otero excluyó a los ciegos, sordos, y mudos, tanto como el “stultus furiosus”, es decir, gente vista como mentalmente inestable (Fernández de Otero 1732: pars 1, cap. iii., para. 1, 28-29). Aunque esta calificación hoy sería discriminatoria, se la puede ver como una forma temprana de garantizar estándares mínimos de actuación, limitando la entrada de aquella gente a través del clientelismo que no tenía la capacidad de escuchar pleitos. También se argumentó contra la inclusión de “bastardos o incestuosos”. Una opinión sostuvo que regularmente se excluían a estos por haber “nacido en lugar indigno”. Sin embargo, Fernández de Otero reconoció que había en la península una serie de capaces hijos de uniones ilegítimas (1732: pars 1, cap. iii., para. 1: 30-32; Castillo de Bobadilla 1616: lib. 1, cap. xii, para. 16). Por ejemplo, don Juan (José) de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, encabezó el partido conservador en Madrid como primer ministro (1677-79). Aparte de aquellos hijos, tampoco podían regularmente servir mujeres como jueces. Sin embargo, en 1687 Juan Alfonso Lancina rechazó la máxima que “imperio de las mugeres suele ser insoportable, porque en todo son estremadas”, porque “en España no vale [...] pues las Berenguelas, Marias, Juanas, y Marianas han dado norma à muchos Reyes”. El autor se refiere a la reina Berenguela de Castilla (1180-1246) y Mariana de Austria (1634-96), la madre de Carlos II, entre otras (Lancina 1687: 30; Bianchini 2012; Llorente 2013: 197-198). La tensión entre la actuación capaz de una serie de reinas y los valores tradicionales de mérito era ya evidente para los contemporáneos.¹⁶

Finalmente, se excluyó a personas conocidas por vivir una mala vida. Los que se entregaron a la codicia, la pasión o la inmoralidad sexual eran descalificados. Más precisamente, la gente debería abstenerse de los pecados capitales, los cuales eran soberbia, envidia, ira, avaricia, pericia, lujuria y gula. No resistir a los pecados era vivir la mala fama. Domingo de Soto (1494-1560) arguyó que el ánimo corrupto o *corruptus animus* no podía

15 “Parecer”, fiscal, Madrid, 27 de febrero de 1716, AGI, México 485, f. 281; “que ninguno sea tratante, ni mercader” (Zevallos 1623: 177v).

16 Incluso la historiografía juzgó duramente sobre Mariana de Austria. Ahora hay una re-evaluación, por ejemplo, en Storrs (2006: 153-157), aunque todavía falta una biografía. Más bien parece que Mariana era una gobernante capaz.

obrar para la equidad de la justicia (de Soto 1968: 2: 267; Lira 2006: 1141).

En la perspectiva del Antiguo Régimen, la mala vida, la falta de limpieza de sangre, el nacimiento bajo o dudoso, el trato ocupacional con dinero o con las manos manchaba a la gente. No se debería fiar en el recto proceder de aquella gente. Nombrar tales personas para ocupar cargos de justicia era considerado corrupción por los tratadistas revisados, y la corrupción era por lo cual, hasta cierto punto, una calidad innata o heredada. Aunque la distinción entre cargos de justicia y otros no era siempre precisa, ya que muchos cargos tenían jurisdicción en algún aspecto, había un consenso que los alcaldes mayores y corregidores, los ministros de la audiencia, y la mayoría de los consejeros eran jueces. Por lo cual, nombrar candidatos con mérito para aquellos cargos era la manera de cumplir con la justicia distributiva.¹⁷

La venta de cargo violaba estos principios, porque gente de insuficiente mérito y corrompida por codicia llegó a adquirir las magistraturas. Este punto arguyó, por ejemplo, el teólogo y jurista francés Pierre Grégoire de Tolosa (Toulouse) (1540-1617), frecuentemente citado en el imperio español. Pierre Grégoire sostuvo que “el príncipe adquiere una mala reputación si vende lo que se ha de distribuir por justicia, y no promueve los doctos e idóneos, los que no pagan voluntariamente, sino los perniciosos, ambiciosos e indignos”. El magistrado “que compra también vende”, notó Pierre Grégoire, basándose en el emperador romano Severo Alejandro (222-235),¹⁸ y “las leyes aplican a los jueces que tuercen la justicia siendo corrompidos por codicia y juzgando por dinero”. Similarmente, el jurista Domingo Antúnez Portugal (1673) sostuvo que era “indecente e indecoroso” para príncipes vender las magistraturas por que las llenaba con “hombres corrompidos por ambición y codicia e infames por su sangre”.¹⁹

17 Las leyes de Indias marcaron la distinción entre cargos con y sin jurisdicción, *Recopilación de leyes* [...] (1953 [1741]), libro 8, título 20, ley 1.

18 “Necessum onim est, ut dicebat Alexander Caesar, ut is, qui emit, vendas [...] Princeps quippe male audit, quod pro iustitia distribuenda, ad quam ipse tenetur, negotiatur in ea, non doctos, & probos qui lubentissime non emunt onus, sed perniciosos ambitiosos & indignos promovet [...] Huc etiam pertinent leges, plectentes iudices corruptos sordibus & per pecunias iudicantes & corruptores, & eos qui nituntur corrumpere, de quibus nos diximus alibi” (Pierre Grégoire Tholosianus 1642: lib. 2, cap. 6, 17).

19 “Reges, & Principes [...] ab huiusmodi venditionibus se abstinere debent, tum quia indecens & indecorum illis est...quippe dum sunt venalia officia, non pendunt personae, quibus venduntur, meritis, sed pecunia. Et tunc saepissime conseruntur Magistratus vi-

Esta ambición era el intento indebido y excesivo de subir en la escala social, lo cual era un rasgo principalmente de grupos socialmente emergentes y no-nobles.²⁰ La infamia de sangre era lo mismo como la insuficiente limpieza de sangre. De tal forma, en 1677 la cámara de Indias, cuya tarea era proponer al rey candidatos a plazas en América, rechazó proveer el gobierno de Yucatán en Antonio de Layseca Alvarado a cambio de un préstamo por 100.000 pesos a la Corona, por los

graves inconvenientes que se siguen a la buena administracion de Justicia, de no proveer los gobiernos en la forma regular, eligiendo los sugetos de mayor integridad, y experiencias, que con desinterés, celo, y cuidado, atiendan al bien publico, y a la satisfaccion de los vasallos, de que depende la quietud y conservación de los reinos, [porque los candidatos] viendose destituidos del premio que podian esperar por sus servicios [y] siendo materia mui escrupulosa no observar la justicia distributiva de que depende todo lo demas que mira al Gobierno universal.²¹

Esta condenación de la venta de nombramientos, por ser violatoria de la justicia distributiva, se compartía ampliamente en Europa occidental.

Este discurso contra el juez corrupto era la expresión de los grupos sociales en pugna. Más que todo los grupos privilegiados del imperio rechazaban el avance de los grupos sociales emergentes. Pedro de Portocarrero y Guzmán, por ejemplo, un aristócrata vinculado con la casa del conde de Palma, un grande de Castilla, propuso que eran los “sugetos indignos” que corrompían la justicia (Peña Izquierdo 2004: 155-156, 207-210, 290-316; Portocarrero y Guzmán 1700: 374). Más que todo los estamentos privilegiados rechazaron la ambición y la mala sangre. De un lado estaban los juristas procedentes del principado municipal que tenían acceso preferente a los cinco colegios mayores de las universidades de Salamanca, Valladolid, y Alcalá de Henares. Aunque originalmente fundados para gente más humilde, los colegios se convirtieron en bastiones socialmente cerrados con amplios privilegios para sus integrantes. Los ministros de los consejeros de la monarquía reclutaron a sus sucesores de este estrato social para las audiencias y consejos (Dedieu 1997: 170-171). Igualmente, el alto clero tanto como la nobleza media y alta fueron los principales grupos

ris ambitione, & avaritia corruptis, & sanguine infamibus, absque litteris, & prudentia qui pecuniis suppleant” (Antúnez Portugal 1673: pars. sec., lib. i, xiv, 6, 7).

20 En Latín: ambitio implicaba exceso (Jiménez Arias 1792: 30).

21 Consulta, Cámara de Indias compuesto por el conde de Medellín, Tomás de Valdés, y el marqués de Santillán, Madrid, 21 de octubre de 1676, AGI, México 362 R., N. 8.

beneficiarios de la justicia distributiva. Este conjunto defendía sus intereses frente a grupos sociales “nuevos”, como bajos nobles, mercaderes, banqueros, los graduados no-colegiales, y burócratas de nivel bajo e intermedio, que buscaban entrar en cargos importantes. Tenían recursos económicos adquiridos por los negocios y el trabajo y podían ser de origen converso o étnicamente mezclados. Cuando la Corona vendía cargos, miembros de estos grupos tuvieron la capacidad de comprarlos.

El discurso contra la corrupción innata de los jueces mantuvo su fuerza incluso en América. Castillo de Bobadilla ya había formulado la crítica contra los alcaldes mayores que actuaban como mercaderes. En 1686 el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz (1677-1699), de ninguna manera sospechoso de inclinaciones reformadoras, criticó la venta de mercancías por los alcaldes mayores.²² Con lo anterior, puede matizarse la tesis de Jeremy Baskes sobre que los reformadores tardío-borbónicos calificaron de corrupta la venta o repartimiento de mercancías por parte de los alcaldes mayores a los indígenas, mientras localmente no se veía el intercambio como tal (Baskes 2000: 76). Como se ha visto, el discurso contra los jueces corruptos por los tratos con dinero era más antiguo que las reformas borbónicas. Fue una noción originalmente medieval vinculada a la pureza de sangre y al mérito. Por lo cual, más bien parece que los reformadores del siglo xviii utilizaron el discurso estamental para prestar legitimidad a su proyecto. La meta reformista, sin embargo, ya no consistió en restituir la preferencia del mérito tradicional, sino en reestructurar la administración hacia un brazo de la voluntad real.

2. La corrupción performativa

En el tardío siglo xvii avanzaba la ilustración temprana en el imperio español, y el Aristotelismo como fundación ideológica perdió influencia igual como su principal intérprete, Tomás Aquino. La tradicional “economía de gracia” marcado por la justicia distributiva estaba en pleno declive (Hespanha 1993: 67-86). fray Francisco Palanco (1657-1720), un exponente destacado de aristotelismo, vapuleó en su *Dialogus physico-theologicus contra philosophiae novatores* el pensamiento cartesiano. Su tratado constituyó

²² Real cédula, Madrid, 10 de febrero de 1716, en Konetzke 1952-1963: vol. 3, tomo 1, p. 123.

el mejor síntoma de que aquellos innovadores de la filosofía, a quienes denunciaba, ya estaban ganando terreno. Paulatinamente, cambiaban los valores que definían la justicia y el buen gobierno. Surgía un intercambio más racional a través del mercado y la burocracia y afloró el ideal burgués de la utilidad para la Corona. La capacidad examinada, la educación formal, la experiencia y el rendimiento en la ocupación infiltraron sucesivamente al sentido del mérito, mientras el origen social selecto como argumento contra la corrupción perdió influencia, aunque no desapareció (Llombard Rosa 2000: 7-8; Israel 2001: 528-540; Asch/Emich/Engels 2011: 29; Thompson 2012: 285-286, 294-295; Reinhard 2003: 338; Ruiz Torres 2007: 212-214).

Con el declive del mérito tradicional, nombrar a alguien por los logros de sus antepasados resultó más cuestionable. Ya en 1687 Juan Alfonso de Lancina expuso que “la nobleza, y el mérito para los cargos, estos deben preferirse, quando no estan juntos, debe tener el merito mejor lugar” (1687: 10). Lancina entendía el mérito ya como un conjunto de actos más importantes que la herencia. Un autor anónimo, probablemente el ya mencionado Melchor Macanaz, sostuvo que las “varas de iudicatura, y gobierno no se dan en dote a muger alguna [...] Parece ignominia, que el haber servido un padre en ministerios de diversa especie, sean meritos para que la hija disponga de una plaza”. Macanaz añadió “si ellos no son capaces, y pasan por el rigor del examen: El Monarca sabe premiar semejantes servicios con oficios meramente legos que no necesitan de ciencia”, y si no “arrinconaria la virtud, enflaqueceriala”.²³ Incluso los oficiales navales Jorge Juan y Antonio de Ulloa, al regresar de América hacia mitad del siglo XVIII, sugerían que fuera “el mérito solo de otros servicios el principal móvil de la gracia” (Juan/Ulloa 1826, vol. 1: 258, véase McFarlane 1996: 46-47). Al fin del siglo XVIII, experiencia y obediencia –no meramente lealtad– al rey determinaban más la carrera ocupacional de los corregidores en España. Administradores exitosos con estudios legales podían coronar su trayecto con una plaza en las audiencias (Loupès/Dedieu 1998: 174; Dedieu 1997:

23 “El deseado gobierno”, ff. 111-12. La crítica de la nobleza ociosa y poco virtuosa tanto como el pensamiento de actuación son más antigua. El jesuita Andrés Mendo arguyó en 1626 que “Quando la nobleza heredada està desnuda de acciones generosas, no es gloriosa. El alabar à uno de noble, es, dar à sus progenitores la alabanza, aplaudirle por rico, es, significar el favor de su fortuna, aclamarle por sus artes, y costumbres, es, engrandecerla à el mismo [...] Tu animo y tu virtud te han de dar el lleno de la grandeza” (Mendo 1662: 17).

179). Como parte de este proceso, en 1783 Carlos III removió legalmente la “vileza” de los oficios mecánicos:

Declaro que no sólo el oficio de curtidor, sino también los demás artes y oficios del herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo, son honestos y honrados [...] no envilece la familia ni la persona del que lo ejerce; ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la república [...] tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el goce y prerrogativas de la hidalguía.²⁴

El rey de esta manera quitó una columna de la corrupción innata, y la corrupción performativa avanzó.

3. El derecho a la luz de la justicia distributiva en oposición al legalismo

Hay indicios de que las quejas de las élites tradicionales sobre la nueva gente corrompiendo la justicia no sólo se referían a la baja procedencia social sino también a su perspectiva del derecho. Estos grupos tradicionales también interpretaron la normatividad de manera más conservadora, aunque las ideas siguientes deberían probarse de manera más sistemática. Los jueces que ascendieron por los mecanismos tradicionales construían el derecho más a la luz de la justicia distributiva y según los intereses de sus grupos. Se puede asumir que hacían referencia a toda la gama de las normas del pluralismo judicial, incluso a las colecciones Romanas, las fuentes teológicas, los intérpretes medievales, etc. Algunos comentaristas exigían tomar en cuenta el estado social en el gobierno. Luis Torres de Lyma, por ejemplo, favoreció a los “ministros, gobernadores, generales, y consejeros que distributivamente tratan del bien general y del aumento y conservación de los vasallos y del reino, que así se hace gobierno justo”.²⁵ Según Castillo de Bobadilla el buen corregidor debería pasar sentencias justas según la “disposicion de la ley, o de la común opinion” (Castillo de Bobadilla 1616:

24 Real cédula, El Pardo, 18 de marzo de 1783, Madrid: Imprenta de Don Pedro Marín, 1783, <<http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=447433#infoejemplares>>; prohibiendo exclusión de hijos ilegítimos de oficios, real cédula, San Ildefonso, 2 de septiembre de 1784, en Konetzke 1952-1962: vol. 3, tomo 2, pp. 539-540.

25 “Ministros, governadores, Generaes, & Conselheiros, que distributiuamente tratem do bem geral, & do augmento, & conseruação dos vassalos, & do Reyno: que por aqui se faz gouerno justo” (Torres de Lima 1654: 130-131).

tomo 1, lib. 1, cap. xii, para. 12). Lo que era exactamente el derecho entre la disposición legal y la común opinión no estaba claramente determinado y abrió espacio para escoger las normas indicadas para cada caso. Como base de aquella interpretación, Tomás de Aquino ya había establecido que la justicia penal era predominantemente el ámbito de la justicia conmutativa, es decir, la atribución igual entre partes sin mirar a la preeminencia. Aquino, no obstante, insistía que “la condición de la persona influye en la cantidad de la cosa, puesto que mayor es la injuria si se hiere al príncipe que si se hiere a una persona privada; y de este modo, la condición de la persona, en la justicia distributiva, es considerada por sí misma” (Aquino 2001: II Ilae, 61, art. 2, res. 3). Según Aquino una persona que cometía un delito contra otra con más prestigio social merecía recibir un castigo más duro que cuando la víctima hubiera sido del mismo o más bajo estado social.²⁶ Esta perspectiva convenía a los élites tradicionales, y aún más cuando tenían jurisdicción sobre la gente como en determinadas regiones de la península. Un sector del pueblo rechazó esta idea. La ley, decía esta parte, era como “telas de arañas, que prenden con ejecutivo rigor para las moscas pequeñas, pero cualquier fuerza mayor rompe la tela”, no obstante de que la justicia debería ser una combinación de rigor y clemencia (Mendo 1662: 117-118). Las quejas del aristócrata Pedro de Portocarrero y Guzmán y sus contemporáneos sobre la corrupción de los tribunales tenían entonces lógica dentro de su perspectiva de corrupción. Como los jueces del nuevo perfil no consideraban el derecho suficientemente a la luz de la justicia distributiva, sus sentencias bien podrían ser corruptas. Estos jueces se identificaron con una lectura más ancha de las leyes de Castilla y de Indias y sus principales intérpretes y promotores, como Juan de Solórzano y Pereyra.

Francisco de Quevedo (1580-1645) todavía había alabado la abundancia de las normas como garantía de la justicia, libertad y virtud, exigiendo que se “admita y practique el Derecho y Leyes de los Romanos” (1772: 2: 525-531, cita en 526). Esta diversidad jurídica, sin embargo, encontró críticas incluso dentro de los grupos conservadores. Para Portocarrero y Guzmán, la “multiplicidad de leyes es evidente prueba de corrupción de costumbres”, aunque su desdén se dirigió contra las pragmáticas reales, es decir, innovaciones por el poderío real (Portocarrero y Guzmán 1700: 172-173). Ya mucho antes

²⁶ El derecho civil alemán incluso conoce la idea que normas de conducta moral entran en la jurisprudencia por el término *Billigkeit* o equidad, como en §§ 138, 157, 242 del *Bürgerliches Gesetzbuch*, lo cual garantiza la *Austauschgerechtigkeit*, es decir, la justicia conmutativa en el sentido moderno (véase Duden 2010).

Juan Bodino (Jean Bodin) había criticado la excesiva flexibilidad de una ley a la luz de la justicia distributiva, la que Bodino con vocabulario aristotélico llamó la justicia geométrica. Según él, observando “la justicia geométrica y dar la pena conforme a la hacienda, y al delicto, no tenia necesidad de hacer ley [...] la variedad de las personas, de los casos, del tiempo, del lugar, es infinita e incomprensible” (Bodino 1590: lib. 6, cap. 6, p. 621). Al principio del siglo xviii Macanaz siguió a Bodino en cuanto que la

multitud de nuestras leyes mas confunden que dirigen a la equidad y a la Justicia [...] cuia contradiccion que arrojan [...] ofuscando los entendimientos de los jueces, tal vez entre la infinidad de dictámenes que encuentren, eligen el menos adaptable á la razon [...] aquello mismo que estaba fundado para distribucion de la justicia [...] no es atendible el que decidan las costumbres del Reyno o las Leyes patrias.²⁷

Macanaz demandaba un fin al pluralismo y un código de pocas leyes sólidas como “pauta y regla á los Jueces y Letrados”.²⁸ Similarmente el visitador de la Audiencia de México, Francisco de Garzarón, descartó las costumbres locales como parte de la normatividad. El patrón de la medida para él eran infracciones de las leyes de Castilla e Indias. Suspendió 13 de los 19 ministros togados y alrededor de 155 oficiales inferiores como los porteros, carceleros, escribanos, y abogados “en conformidad de las leyes”, y prometió restablecer “la práctica de Ordenanzas y Leyes Olvidadas”.²⁹ Después de este castigo de la audiencia, el rey amonestó precisamente la

poca observancia de quanto con madura reflexion prebienen las Leyes de esos, y estos Reynos, sino tambien su entero abandono, con grabe menoscabo de mi real authoridad a esa Audiencia, y no menores perjuicios a la causa publica, por la mala Administracion de Justicia y [...] muchas incombeniencias”, exigiendo “el exacto cumplimiento de las Leyes, y Ordenanzas que teneis juradas [...] para que reformeis y quiteis todos los abusos introducidos y practicados, con nombre de estilos, siendo, como son realmente corruptelas.”³⁰

El rey demostraba el declive del pluralismo normativo, ya que el estilo en este sentido no sólo significaba la costumbre, sino “la formula de proceder

²⁷ “El deseado gobierno”, f. 21-21v.

²⁸ “El deseado gobierno”, f. 21-21v.

²⁹ Garzarón al rey, México, 20 de febrero de 1723, AGI, México 547.

³⁰ El rey a la audiencia de México, Lerma, 13 de diciembre de 1721, AGN, Historia 102, f. 82-82v.

jurídicamente” (RAE 1732: 3: 635, 1; Quevedo 1772: 527). Garzarón y la Corona veían estos métodos en la Nueva España como corruptos, porque se desvían demasiado de las leyes reales. Otros autores como Macanaz compartían esta idea.³¹ Un ejemplo es la defensa del oidor Félix Suárez de Figueroa contra cargos de la visita, recurriendo al pluralismo judicial. En 1724 Garzarón suspendió al juez porque se había comprado una casa en la ciudad de México entre varias otras ofensas. Suárez de Figueroa citó una real cédula de 1663 que permitía tal compra. Igual el oidor impugnó haber cobrado honorarios excesivos como juez de la comisión de tierras. Esta comisión legalizaba la transferencia de tierras baldías en manos particulares, y por lo ende ofrecía amplias oportunidades de abuso. El juez sostuvo que toda la comisión era fuera del ámbito de la visita. Según el fiscal del Consejo de Indias, sin embargo, la recopilación de las leyes de Indias derogaba la cédula citada. Además, seguía el jurista, el intento de excluir la comisión de tierras de la visita ya “solo en su proposición justifica la pena impuesta”, porque un “ministro que mereció la honra de Vuesa Majestad [...] falte a su obligación recibiendo dones que indistintamente le prohíbe la ley [...] produjo los repetidos agravios de los dueños de tierras”.³² El fiscal en Madrid y el visitador en la Nueva España rechazaron la defensa polivalente del juez, el cual perdió su plaza. Después Suárez de Figueroa y su esposa seguían presionando a la Corona y cuando el ex oidor murió, ella logró la restitución del salario perdido, lo que era equivalente con una compensación financiera.³³ Hay entonces fuertes indicios que el pluralismo era una arma cada vez más débil, e hizo una tímida impresión en Garzarón y en el fiscal. No se puede aquí probar que los dos se adhirieron a una interpretación exclusivamente legalista, es decir, basado sólo en las leyes reales, pero sí que aquellas leyes jugaron el rol principal para juzgar a los ministros de la audiencia.

Mientras tanto en un contexto distinto, Tamar Herzog argumenta que las “reglas dominantes en Quito eran sociales y teológicas, y no legales [...] y las reglas procedieron de otra fuente que el rey” (Herzog 2004: 9). En el

31 “No es atendible el que decidan las costumbres del Reyno o las Leyes patrias”, Macanaz: “Los veinte y dos auxilios para el buen gobierno de una Monarquía [...]”, Paris 29 August 1722, Memorial y Advertencia al Rey Felipe Quinto”, Biblioteca de Aragón, Miscelánea, MS 141, f. 21-21v.

32 “Parecer”, fiscal José de Laysequilla, Madrid, 14 de agosto de 1724, AGI, Escribanía de Cámara 287B, “pza. 39”, ff. 1-1v, 133.

33 “Sentencia definitiva”, Madrid, 7.7.1725, AGI, Escribanía 287B, “pza 39 escrituras presentadas en la ultima instancia”, ff. 132-135, 136, 142.

caso de la Nueva España visitada por Garzarón, difícilmente podría sostenerse una visión similar. El visitador se basó en las leyes promulgadas por la Corona. No había una clara distinción entre visiones de justicia de la sociedad local y la del visitador. Garzarón necesitaba respaldo político local para sus veredictos y sólo pudo reunir una gran cantidad de testigos dispuestos a declarar contra los ministros porque partes de la sociedad compartían su visión. El visitador no actuaba por encima de la sociedad, sino forjaba alianzas con la sociedad local para conseguir sus metas.

Conclusión

En este artículo se juxtaponen dos conceptos, o más bien, dos tipos ideales, de la corrupción del antiguo régimen. La falta de origen social esclarecido, la “sangre manchada” por herejes o gente no-blanca, el trabajo vil y manual tanto como el manejo del dinero eran reprochables. Tales personas iban a actuar de manera viciosa en las magistraturas, y por lo tanto eran corruptas y violaban los principios de la justicia distributiva, basada en los nombramientos por mérito. El mérito tradicional se definía por la limpieza de sangre, la nobleza, y por los servicios, del candidato o sus antepasados, de armas, estudios universitarios cumplidos, o en el ejercicio de cargos públicos. Más que todo, las élites estamentales, como la aristocracia, el alto clero, o los juristas predominantemente procedentes del patriciado municipal de Castilla, sostuvieron tal concepto. Sin embargo, cuando la economía de gracia disminuyó al fin del siglo xvii y los pensadores ilustrados reemplazaron cada vez más a los protagonistas del aristotelismo y del tomismo en el discurso público, también se debilitó la justicia distributiva. En esa medida avanzó la idea de la corrupción como violación de las leyes de Castilla e Indias gobernando la actuación en el cargo público. Grupos burgueses económicamente exitosos forjaron una alianza con protagonistas del poderío real para dar más vigencia al concepto de la corrupción performativa en cambio por el más fácil acceso a cargos importantes. Juntos dejaron de lado la corrupción basada en el origen social.

Es imprescindible entender la transformación de la corrupción sin imputarle ideas modernas. No se debería asumir que la corrupción tenía la connotación actual, ni que tal concepto no se empleaba por ser ajeno a la moralidad de tiempos distintos. Más bien coexistían sentidos distintos de corrupción dentro de un sistema jurídico y moral del antiguo régimen

en proceso de cambio. Según la hipótesis aquí propuesta, los representantes estamentales como Pedro de Portocarrero y Guzmán lamentaron la corrupción de los tribunales y tenían razón en que los jueces del nuevo perfil se basaban menos en la justicia distributiva vinculada al pluralismo judicial. Para Portocarrero y Guzmán, menospreciar esta forma de justicia también era corrupto. Mientras tanto, los protagonistas del poder real favorecían las leyes de Castilla e Indias como pauta de la justicia y criticaron la abundancia y confusión del pluralismo. Este argumento muestra cuán difícil es juzgar si la corrupción debilitó el estado del antiguo régimen. La venta de cargos corrompía la justicia según la visión innatista, pero hasta ahora no hay evidencia de que los compradores ignoraran las leyes reales o aceptaran sobornos más que los jueces nombrados por criterios tradicionales. Por lo cual, este análisis pone en tela de juicio la visión historiográfica –ya algo obsoleta– de la decadencia (véase Storrs 2006: 10-14) tanto como de la corrupción del imperio español al fin del siglo xvii causada por la masiva venta de cargos de justicia a partir de 1675.

Bibliografía

- ANDRIEN, Kenneth J. (1994): "Corruption, Self-Interest, and the Political Culture of Eighteenth-Century Quito". En: Matthews, Richard K. (ed.): *Virtue, Corruption, and Self-Interest. Political Values in the Eighteenth Century*. Bethlehem: Lehigh University Press, pp. 270-296.
- ANDÚJAR CASTILLO, Francisco (2004): *El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo xviii*. Madrid: Marcial Pons.
- ANTÚNEZ PORTUGAL, Dominico/Domingo (1673): *Tractatus de donationibus jurium et bonorum regiae coronae*. 2 vols. Lisboa: Ioannis a Costa.
- AQUINO, Tomás de (2001): *Suma de Teología*. Dirigida por los regentes de estudios de las provincias de Dominicos de España, presentación Damián Byrne, 4ª ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- ASCH, Ronald/EMICH, Birgit/ENGELS, Jens Ivo (2011): *Integration, Legitimation, Corruption, Politische Patronage in Früher Neuzeit und Moderne*. Frankfurt: Peter Lang.
- BASKES, Jeremy (2000): *Indians, Merchants, and Markets. A Reinterpretation of the repartimiento and Spanish-Indian Economic Relations in Colonial Oaxaca, 1750-1821*. Stanford: Stanford University Press.
- BERTRAND, Michel (2011): "Viejas preguntas, nuevos enfoques: la corrupción en la administración colonial española". En: Andújar Castillo, Francisco/del Mar Felices de la Fuente, María (eds.): *El poder del dinero. Ventas de cargo y honores en el Antiguo Régimen*. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 46-62.

- BIANCHINI, Janna (2012): *Queen's Hand: Power and Authority in the Reign of Berenguela of Castile*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- BODIN, Jean (1590): *Los seis libros de la republica traducidos de la lengua Francesa, y enmendados Catholicamente: por Gaspar de Añastro Ysunza, thesorero general de la Serenísima Infanta de España Doña Catalina, Duquesa de Savoya al principe nuestro señor*. Torino: Herederos de Bevilaqua.
- BÖTTCHER, Nikolaus (2011): "Inquisición y limpieza de sangre en Nueva España". En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico*. México, D.F.: El Colegio de México, pp. 187-217.
- BURKHOLDER, Mark A. (2013): *Spaniards in the Colonial Empire. Creoles vs. Spaniards?* Chichester: Wiley & Blackwell.
- BURKHOLDER, Mark A./CHANDLER, D. S. (1977): *From Impotence to Authority: the Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808*. Columbia: University of Missouri Press.
- BÜSCHGES, Christian (2005): "Don Quijote in Amerika. Der iberoamerikanische Adel von der Eroberung bis zur Unabhängigkeit". En: Edelmayer, Friedrich/Hausberger, Bernd/Potthast, Barbara (eds.): *Lateinamerika 1492-1850/70*. Wien: ProMedia, pp. 154-170.
- CASTILLO DE BOBADILLA, Gerónimo (1616) [original de 1597, reimpresso 1704]: *Politica para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiasticos, y seglares, y de sacas aduanas, y de residencias y sus oficiales, y para regidores y abogados, y del valor de los corregimientos y gobiernos realengos y de las ordenes*. Barcelona: Gerónimo Margarit.
- DEDIEU, Jean-Pierre (1997): "La haute administration espagnole au xviii^e siècle. Un projet". En: Descimon, Robert/Schaub, Jean-Frédéric/Vincent, Bernard (eds.): *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal 16^e-19^e siècle*. Paris: EHESS, pp. 167-180.
- DROSTE, Heiko (2002): "Patronage in der frühen Neuzeit – Institutionen und Kulturformen". En: *Zeitschrift für historische Forschung* 30, pp. 555-590.
- DUDEN (2010): *Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf*. 2^a ed. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus.
- FERNÁNDEZ DE OTERO, Antonio (1732): *Tractatus de Officialibus Reipublicae, necnon opidorum utriusque Castellae, tum de eorundem electione, usu, exercitio. Opus non solum tironibus, sed etiam magistris pernecessarium, duplici indice, capitum scilicet, & rerum locupletatum. Editio Tertia, auctior et accuratior*. Colonia (Genève): Fratres de Fonties.
- GARRIGA, Carlos (2006): "Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos xvi-xii)". En: *Revista de Historia del Derecho* 34, pp. 67-160.
- GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín (1978): "Estudio preliminar". En: Martín-Retortillo, Sebastián (ed.): Castillo de Bobadilla, *Politica para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiasticos, y seglares, y de sacas aduanas, y de residencias y sus oficiales, y para regidores y abogados, y del valor de los corregimientos y gobiernos realengos y de las ordenes*, facsímile. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, pp. 7-34.

- GRÜNE, Niels (2010): “Und sie wissen nicht, was es ist: Ansätze und Blickpunkte historischer Korruptionsforschung”. En: Grüne, Niels/Slanička, Simona (eds.): *Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 11-34.
- HAUSBERGER, Bernd (2011): “Limpieza de sangre y construcción étnica de los vascos en el imperio español”. En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico*. México: El Colegio de México, pp. 77-111.
- HERING TORRES, Max S. (2011): “Limpieza de sangre en España. Un modelo de interpretación”. En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico*. México: El Colegio de México, pp. 29-62.
- HERZOG, Tamar (2004): *Upholding Justice. Society, State, and the Penal System in Quito (1650-1750)*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- HESPANHA, António Manuel (1993): “Les autre raisons de la politique. L'économie de la grâce”. En: Schaub, Jean-Frédéric (ed.): *Recherche sur l'histoire dans le monde ibérique*. Paris: Presses de l'École Normale Supérieure, pp. 67-86.
- (1997): “Paradigmes de légitimation, aires de gouvernement, traitement administratif et agents de l'administration”. En: Descimon, Robert/Schaub, Jean-Frédéric/Vincent, Bernard (eds.): *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal 16^e-19^e siècle*. Paris: EHESS, pp. 19-28.
- (2006): “Porque é existe e em que é que consiste um direito colonial Brasileiro?” En: França Paiva, Eduardo (ed.): *Brasil-Portugal. Sociedades, culturas e formas de governar no mundo português (séculos XVI-XVIII)*. São Paulo: Annablume, pp. 21-41.
- ISRAEL, Jonathan I. (2001): *Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750*. Oxford: Oxford University Press.
- JIMÉNEZ ARIAS, Diego (1792): *Lexicon ecclesiasticum latino-hispanicum: Ex sacris Bibliis, conciliis, pontificum decretis, ac theologorum placitis....* Girona: Narcissum Oliva.
- JUAN, Jorge/ULLOA, Antonio de (1826): *Noticias secretas de America : sobre el estado naval, militar, y politico de los reynos del Perú y provincias de Quito, costas de Nueva Granada y Chile, gobierno y regimen particular de los pueblos de Indios, cruel opresión y extorsiones de sus corregidores y curas, abusos escandalosos introducidos entre estos habitantes por los misioneros, causas de su origen y motivos de su continuación por el espacio de tres siglos escritas fielmente segun las instrucciones del excelentísimo Señor Marqués de la Ensenada, primer secretario de estado y presentadas en informe secreto á S. M. C. el señor don Fernando VI*. London: R. Taylor.
- KLAVEREN, Jakob van (2002): “Corruption as a Historical Phenomenon”. En: Heidenheimer, Arnold J./Johnston, Michael (eds.): *Political Corruption. Concepts & Contexts*. New Brunswick: Transaction Publishers, pp. 83-94.
- (1957): “Die historische Erscheinung der Korruption, in ihrem Zusammenhang mit der Staats- und Gesellschaftsstruktur betrachtet”. En: *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 44, 4, pp. 289-324.
- KONETZKE, Richard (ed.) (1953-1962): *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810*, 3 vols. Madrid: CSIC.

- LANCINA, Juan Alfonso de (1687): *Commentarios politicos a los Annales de Cayo Vero Cornelio Tacito dirigidos al Excelentissimo Señor Don Manuel Joachin Garcia Alvarez de Toledo y Portugal Cordova Zuñiga Pimentel Monroy y Ayala, Conde de Oropesa*. Madrid: Oficina de Melchor Álvarez.
- LIRA, Andrés (2006): "Dimension jurídica de la justicia. Pecadores y pecados en tres confesionarios de la Nueva España, 1545-1732". En: *Historia Mexicana* 220, pp. 1139-1179.
- LOMBARD Rosa, Vicent (2000): "El pensamiento económico de la Ilustración en España (1730-1812)". En: Fuentes Quintana, Enrique (ed.): *Economía y economistas españoles. Vol. 3. La Ilustración*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, pp. 7-89.
- LORENTE, Mercedes (2013): "Mariana of Austria's Portraits as Ruler-Governor and *Cura-dora* by Juan Carreño de Miranda and Claudio Coello". En: Cruz, Anne J./Galli Stampino, Maria (eds.): *Early Modern Habsburg Women: Transnational Contexts, Cultural Conflicts, Dynastic Continuities*. Brookfield: Ashgate, pp. 197-222.
- LOUPÈS, Philippe/DEDIEU, Jean-Pierre (1998): "Pouvoir et vénalité des offices en Espagne. Corregidores et échevins, un groupe médian?" En: Cassan, Michel (ed.): *Les officiers "moyens" à l'époque moderne: pouvoir, culture, identité*. Limoges: Presses universitaires de Limoges.
- MACHIAVELLI, Niccolò (1967): *Il Principe, e pagine dei Discorsi e delle Istorie*, ed. Luigi Russo. Firenze: Sansoni.
- McFARLANE, Anthony (1996): "Political Corruption and Reform in Bourbon Spanish America". En: Little, Walter/Posada-Carbó, Eduardo (eds.): *Political Corruption in Europe and Latin America*. London: Macmillan, pp. 41-64.
- MACLACHLAN, Colin M. (1988): *Spain's Empire in the New World. The Role of Ideas in Institutional and Social Change*. Berkeley: UCLA Press.
- MAZÍN, Oscar (2011): "La nobleza ibérica y su impacto en la América española: tendencias historiográficas recientes". En: Böttcher, Nikolaus/Hausberger, Bernd/Hering Torres, Max S. (eds.): *El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico*. México: El Colegio de México, pp. 63-76.
- MENDO, Andrés (1662): *Príncipe Perfecto y Ministros Aiustados, Documentos Políticos y Morales. En Emblemas*. León/Lyon: Horacio Boissat/George Remeus.
- MOUTOUKIAS, Zacarias (1997): "Una forma de oposición: el contrabando". En: Flynn, Dennis O./Giráldez, Arturo (eds.): *Metals and Monies in an Emerging Global Economy. An Expanding World. The European Impact on World History 1450-1800*. Aldershot: Variorum, pp. 19-54.
- "Original Sin" (2009). En: Cross, F. L./Livingstone, E. A. (eds.): *The Oxford Dictionary of the Christian Church*. Oxford: Oxford University Press. <<http://www.oxfordreference.com>> (2.3.2015).
- OTTO, Jonathan (2009): "Tiraquellus, Andreas (André Tiraqueau)". En: *The Oxford International Encyclopedia of Legal History*. Oxford: Oxford University Press. <<http://www.oxfordreference.com>> (1.10.2014).
- PHELAN, John L. (1967): *The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century: Bureaucratic Politics in the Spanish Empire*. Madison: University of Wisconsin Press.

- PIETSCHMANN, Horst (1997): "Corrupción en las Indias Españolas: Revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia* 40, pp. 39-54.
- (2013): "'Corrupción' en el virreinato novohispano: un tercer intento de valoración". En: *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*. <<http://e-spania.revues.org/22848>> (13.12.2013).
- PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Pedro (1700): *Theatro monarchico de España que contiene las mas puras, como catholicas, maximas de estado, por las quales, assi los principes, como las republicas, avmentan y mantienen sus dominios, y las causas que motivan su ruyna*. Madrid: Juan García Infançon.
- PEÑA IZQUIERDO, Antonio Ramón (2004): *La casa de Palma. La Familia Portocarrero en el Gobierno de la Monarquía Hispánica (1665-1700)*. Córdoba: Universidad de Córdoba.
- PLUMPE, Werner (2009): "Korruption. Annäherung an ein historisches und gesellschaftliches Phänomen". En: Engels, Jens Ivo/Fahrmeir, Andreas/Nützenadel, Alexander (eds.): *Geld-Geschenke-Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa*. München: Oldenbourg, pp. 19-48.
- QUEVEDO, Francisco de (1772): *Fortuna con seso. En Obras de D. Francisco de Quevedo Villegas, Caballero del Habito de Santiago, Secretario de S. M. y Señor de la Villa de la Torre de Juan Abad*. tomo 2. Madrid: Joachin Ibarra, pp. 479-567.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1732): *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua [...]*. Madrid: Real Academia.
- Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor. Va dividida en tres tomos, con el Índice general, y al principio de cada tomo el Índice especial de los titulos que contiene*. Madrid: Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1741. Reimpresión Madrid: Consejo de Hispanidad, 1943.
- REINHARD, Wolfgang (2003): *Geschichte der Staatsgewalt: Eine vergleichende Verfassungsgeschichte*. 3ª ed. München: C.H. Beck.
- ROSENMÜLLER, Christoph (2008): *Patrons, Partisans, and Palace Intrigues: The Court Society of Colonial Mexico, 1702-1710*. Calgary: University of Calgary Press.
- RUÍZ TORRES, Pedro (2007): *Reformismo e Ilustración*. Vol. 5 de *Historia de España*. Madrid: Crítica/Marcial Pons.
- SAXOFERRATO, Bartolus de [Sassoferrato, Bártolo de] (1590): *Omnium Iuris Interpretum Antesignani Comentaria Nunc Recens, praeter alias additiones ad hanc diem editas, Aureis Adnotationibus Iacobi Anelli De Bottis & Petri Mangrellae. Tomus octavus In secundam, atque tertiam Codici partem*. Venezia: Apud Iuntas.
- SCHWARTZ, Stuart (1973): *Sovereignty and Society in Colonial Brazil. The High Court of Bahia and its Judges, 1609-1751*. Berkeley: University of California Press.
- SOLÓRZANO Y PEREYRA, Juan de (1972 [1629/1648, republicado Madrid: M. Sacristán 1736-1739]): *Política Indiana*. Amendada por Francisco Ramiro de Valenzuela. Madrid: Atlas.

- SOTO, Domingo de (1968): *De iustitia et iure libri decem. De la justicia y del derecho en diez libros*, facsimile, tomo 2. Trad. Marcelino González Ordóñez, intro. Venancio Diego Carro. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
- SPEER, Heino: *Rechtshistorische Notizen und Texte*. En: <<http://drqerg.de/RHN/personen/>> (20.9.2014).
- STORRS, Christopher (2006): *The Resilience of the Spanish Monarchy, 1665-1700*. Oxford: Oxford University Press.
- SUTER, Andreas (2010): "Korruption oder Patronage? Außenbeziehungen zwischen Frankreich und der Alten Eidgenossenschaft als Beispiel (16. bis 18. Jahrhundert)". *Zeitschrift für Historische Forschung* 37, 2, pp. 187-218.
- TORRES DE LIMA, Luis (1654): *Compendio das mais notaveis cousas que no reyno de portugal acontecerão desde a perda del Rey D. Sebastião até o anno de 1627 com outras cousas tocantes ao bom governo, & diversidade d'Estados*. Coimbra: Officina de Manoel Dias.
- TAU ANZOÁTEGUI, Victor (2000): "El poder de la costumbre. Estudios sobre el Derecho Consuetudinario en América hispana hasta la Emancipación". En: *Nuevas Aportaciones a la historia jurídica de Iberoamérica* [CD-Rom]. Madrid: Fundación Histórica Tavera/Hernando de Larramendi/Mapfre.
- THOLOSANUS, Petrus Gregorius [Toulouse, Pierre Grégoire] (1642): *De republica libri sex et viginti: Antea in duos distincti tomos, nunc vno concise & artificiose comprehensi*. 3ª ed. Frankfurt: Typis Matthæi Kempfferi, sumpt[i]bus Philippi Jacobi Fischeri.
- THOMPSON, I.A.A. (2012): "Do ut des: La economía política del 'servicio' en la Castilla moderna". En: Esteban Estríngana, Alicia (ed.): *Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII*. Madrid: Silex.
- VALLEJO GARCÍA-HEVIA, José María (2008): *Juicio a un conquistador. Pedro de Alvarado*. Madrid: Marcial Pons.
- WAQUET, Jean-Claude (1991): *Corruption. Ethics and Power in Florence, 1600-1770*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- WEIMAR, Peter (2009): "Bartolus of Saxoferrato". En: Katz, Stanley N. (ed.): *The Oxford International Encyclopedia of Legal History*. Oxford: Oxford University Press. <<http://www.oxfordreference.com>> (24.2.2015).
- ZAPATA Y SANDOVAL, JUAN (1994-1995 [1630]): "Disceptación sobre justicia distributiva y sobre la acepción de personas a ella opuesta". Vol. 1: *Sobre la justicia conforme a sí misma*. Vol. 2: *En qué cosas tiene lugar la acepción de personas y la injusta distribución de los bienes*. Traducción del latín de Arturo Ramírez Trejo, edición de Paula López Cruz y Mauricio Beuchot Puent. México: UNAM.
- ZEVALLOS, Geronimo de (1623): *Arte Real para el buen gobierno de los Reyes, y Principes, y de sus vassallos, en el qual se refieren las obligaciones de cada uno, con los principales documentos para el buen gobierno. Con una tabla de las materias, reduzidas a trezientos Aforismos de Latin y Romance. Dirigido a la catolica magestad del Rey don Felipe IIII. N. S. Monarca y Emperador de las Españas, no reconicente superior en lo temporal. Por el licenciado Geronimo de Zevallos, Regidor de la Imperial ciudad de Toledo en el vanco, y assiento de los Cavalleros, y unico Patron del Monasterio de los Descalços Franciscos de la dicha ciudad..* Toledo: A costa de su autor.